

VIOLENCIAS LEGALES E ILEGALES MEXICANAS: POLÍTICA Y CRIMEN ORGANIZADO. EL CASO DE LA MINERÍA EN LA SIERRA-COSTA DE MICHOACÁN.

Ana del Conde y Heriberto Paredes¹

1 Ana del Conde es estudiante de doctorado en antropología en la Universidad de Massachusetts Amherst. Actualmente su investigación se enfoca en la participación de mujeres en procesos de autogestión y resistencia en contra del crimen organizado y de la devastación de recursos naturales en México. Contacto: adelconde@anthro.umass.edu

Heriberto Paredes (Tlaxcala, México, 1983) cursó la Maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Se desempeña como periodista y fotógrafo independiente desde 2010. Ha publicado en *Zetas: la franquicia criminal* de Ricardo Ravelo, México, Ediciones B, 2014; *Latinamerikanske løsninger*, Comité Noruego en Solidaridad con América Latina (LAG), Oslo, 2012; en la *Revista Variopinto*, periódico *Frente*, *Latein Amerika Nachrichten* (Alemania), *Latin Amerika* (Noruega); en las páginas web de: *Emeequis*, *Animal Político*, *Horizontal*, Agencia *SubVersiones*, *Surco Informativo*, *Mondal Nieuws* (Bélgica) y *Alter Monde* (Francia). Contacto: hparedescoronel@gmail.com

RESUMEN

Las violencias en México y en todo Centro y Sudamérica no son azarosas, ni son resultados inamovibles de un trauma social previo. Nuestra propuesta es examinar cómo la violencia organizada en la región sierra-costa de Michoacán, opera y toma forma dentro del contexto más amplio de la circulación del capital y de la actividad empresarial, especialmente en industrias extractivas como la minería. Nos interesa contribuir al creciente corpus de investigación que busca nuevos acercamientos a las nociones de *guerra* y *conflicto* para entender y articular las conexiones entre varias formas de violencia estatal y no estatal y la expansión del capitalismo. El caso de la minería legal e ilegal en Michoacán ejemplifica estas premisas y les da vida a través del testimonio de quienes han padecido esta situación en donde el capitalismo es analizado a través de la forma de operar del crimen organizado.

Palabras clave: capitalismo, crimen organizado, despojo, violencia.

Para comprender la actual crisis de seguridad en México, es importante analizar a fondo las diferentes realidades que existen dentro del crimen organizado. Así, nuestra investigación busca entablar una conversación crítica y profunda entre los diversos actores que existen bajo este manto: el gobierno, la multiplicidad de grupos armados, inversión privada, así como quienes luchan dentro de movimientos de protesta. Para ello nos proponemos hacer un análisis de la extracción minera del país —con un especial enfoque en los municipios de Aquila y Chinicuilá, en Michoacán— y su relación con el crimen organizado, proponiendo como soporte teórico los conceptos de violencia, necropolítica y *capitalismo gore*. Estas nociones nos servirán como herramienta de análisis para comprender con mayor exactitud cuáles son las disposiciones y nexos que existen bajo lo que hoy en día denominamos ‘crimen organizado’. El enfoque principal de la investigación es dar cuenta sobre la relación que existe entre las industrias extractivas en la costa-sierra de Michoacán, el crimen organizado, y las comunidades indígenas nahuas de la región.

UN ENFOQUE TEÓRICO SOBRE LA VIOLENCIA EXTRACTIVA

Considerando que el 52% de la superficie nacional pertenece a la propiedad social (CEDRSSA, 2015) —ejidos y territorio comunal—, es importante comprender cuáles son los retos a los que se enfrentan las comunidades propietarias. Así mismo, es fundamental resaltar que en México el 53% de los recursos naturales y el 62% de las áreas naturales protegidas se encuentran dentro de territorios de propiedad social (Bunge Vivier, 2012). En el estado de Michoacán existe un total de 2 835 653 hectáreas certificadas bajo este rubro, esto es el 49% de su territorio (*ibid.*).

Desde la década de 1980, las prácticas neoliberales puestas en marcha en México y el resto del mundo han promovido la privatización de este tipo de régimen de tierra por medio de concesiones y venta de las tierras, propiciando lo que David Harvey (2004) llama ‘acumulación por despojo’. Esto es, prácticas reglamentadas que han permitido la explotación al despojar a las comunidades de sus tierras.

Sin embargo, hoy en día parece ser que estas políticas permiten un vínculo entre economías legales e ilegales las cuales se sustentan a partir de aterrorizar a la población a través de asesinatos, desapariciones y extorsiones —una práctica que podríamos llamar ‘acumulación por terror’ inspirándonos en Harvey, o bien, lo que Sayak Valencia (2012) llama *capitalismo gore*. En este sentido nuestra hipótesis principal es que la desestabilización social y política que se ha generado a partir de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ en México ha abierto oportunidades económicas en donde la línea entre lo legal y lo ilegal es frecuentemente borrosa e inevitablemente depende de prácticas violentas y opresoras en contra de comunidades locales.

William Pansters nos presenta tres formas de repensar la violencia pública: violencia institucional, violencia contra-institucional, y violencia para-institucional (Pansters 2012: 87). La primera es aquella liderada por las fuerzas del estado, la segunda es la que se organiza para suplantar o arrebatarle el poder a estas, mientras que la última es llevada a cabo por agentes que trabajan para el estado de forma paralela y no oficial.

Para Pansters estas distinciones resultan importantes para comprender las estructuras de poder que dictan la violencia actual en México como un entramado de actores que responden a intereses diversos y comúnmente confrontados. Asimismo, este análisis sirve para dar un lugar específico a la resistencia civil como fuerza organizada y política que en momentos recurre a la violencia como estrategia para enfrentar y dar solución a aquellas situaciones en donde existen estructuras opresivas y una atención escasa o nula por parte del estado. Sin embargo, parece importante retomar la propuesta de Pansters con un análisis adicional que indague en cuáles son las fuerzas que mueven a estos tres agentes de violencia hoy en día. Especialmente cuando se busca comprender la participación que tienen en la formación de economías (i)legales.

Sayak Valencia define *capitalismo gore* como “una transvalorización de valores y de prácticas (económicas, políticas, sociales y simbólicas) que se llevan a cabo a través del derramamiento de sangre explícito e injustificado en territorios vulnerabilizados” (Valencia 2012: 84). Para ella, este tipo de violencia se encuentra sustentada en las demandas de hiperconsumo que dicta la economía global. Para la autora, resulta importante resaltar que el capitalismo gore no puede ser indisociable de las prácticas de violencia vividas en el país ya que se sustenta en los procesos de producción de capital que buscan favorecer a la industria nacional e internacional. Así, la violencia es fácilmente utilizada como un arma de producción, la cual establece nuevos órdenes de valor a partir de estándares morales dictados por un ritmo económico individualista.

Cuando nos enfocamos en la cadena de producción y distribución de narcóticos, y en los negocios paralelos a este comercio comandados por el crimen organizado, descubrimos que a través de medidas violentas se ha generado una economía alternativa igual o más poderosa que la legal, la cual dicta un orden político. Para Mbembe (2016), esta violencia sólo puede ser comprendida al notar que la necropolítica² está directamente relacionada a lo que él llama *necroeconomía*. Esto es, la forma en la que el capitalismo

2 El término necropolítica proviene del trabajo del académico Achille Mbembe quien plantea que “la expresión última de soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir” (Mbembe 2011:19)

actual explota y gestiona a las poblaciones, exponiéndolas a todo tipo de peligros y riesgos. Así, la necropolítica se vuelve el medio a través del cual se dicta la violencia en el capitalismo contemporáneo.

Nuestra investigación hace uso de estas concepciones teóricas para enfocarse en la extracción minera de la región de la Costa-Sierra michoacana, en los municipios de Aquila y Chinicuilá. El análisis parte de una investigación etnográfica en la región y se enfoca en dos zonas de extracción minera: Las Encinas, mina legal a cargo de la empresa italo-argentina Ternium, y La Nuez, mina ilegal explotada por el cártel de los Caballeros Templarios.

FOTOGRAFÍA DE LA NECROPOLÍTICA

A cuatro horas y media de Apatzingán, manejando a través de la sierra uno puede llegar a la carretera federal 200, la cual recorre todo el litoral del Pacífico mexicano. Pasan por ahí cientos de camiones de carga que transportan el hierro extraído (i)legalmente, el cual es llevado a los puertos más importantes de la región: el de Lázaro Cárdenas y el de Manzanillo. También transitan camionetas con gente armada, quienes vigilan que dichos camiones lleguen a su destino.

Desde comienzos de 2013 hasta ahora, en este punto de la carretera hay un retén de la marina, a un costado de una población conocida como La Placita. No parece ser mucha coincidencia que sea aquí mismo en donde tuvieron grandes casas tanto el jefe de plaza, Mario Álvarez, como su operador de sicarios, Felipe González —el primero fue presidente municipal de Aquila y el segundo ha sido empresario terrateniente. En 2013 nadie se atreve a salir por la noche. La gente camina con la cabeza agachada y se respira un ambiente de tensión y miedo. Mientras todo esto ocurre, la marina está ahí, en su puesto de control, con autos blindados y muchas armas, deteniendo y cuestionando arbitrariamente a la gente. A los Caballeros Templarios nunca los paran; a ellos parece ser que les cuidan el camino y les abren paso si es necesario. La mayor cantidad de personas asesinadas o desaparecidas por el crimen organizado en la región tuvo lugar justo ese año.

LA PERSPECTIVA DE MICHOACÁN, LA GUERRA QUE NADIE QUISO VER

Con una amplia presencia de cuatro pueblos indígenas y una diversidad de ecosistemas y formas de vida, Michoacán es uno de los estados mexicanos con mayor pluralidad (INEGI, 2016). En su superficie existen numerosos bosques, regiones lacustres, cordilleras montañosas, zonas semiáridas, amplios valles y una extensa costa en el Pacífico. Los recursos naturales son incalculables y van desde maderas preciosas hasta minerales como hierro y oro. En sus fértiles tierras se cultiva maíz, aguacate y limón, y existen también extensas zonas ganaderas. Otras de las columnas de la economía estatal son: *i*) la siembra, comercialización y distribución de marihuana; *ii*) la producción de metanfetamina y otras drogas sintéticas; *iii*) el embarque y desembarque de miles de toneladas al año de cocaína proveniente de Colombia que tienen como destino el mercado local de Estados Unidos; y *iv*) el mercado negro de armas, el cual ha aumentado significativamente en los últimos cuatro años (LopCam, 2014).

En la década de 1990 la siembra y venta de marihuana se consolidó como un negocio rentable, organizado en pequeñas agrupaciones locales encabezadas por el cártel del Milenio o de los Valencia, quienes convertirían las costas michoacanas en punto de embarque y desembarque de cocaína (Gil, 2015:73). A comienzos del año 2002, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel,³ un grupo de los Zetas se hizo presente en la entidad y comenzó un régimen de terror apoderándose de esta importante conexión con el Océano Pacífico (Moreno, 2010: 71). Este oscuro proceso desató una ola de violencia nunca antes vista y provocó que un grupo de personas, conocidas como La Familia Michoacana, hiciera frente a quienes consideraban invasores. Dicha agrupación logró

3 Lázaro Cárdenas Batel, gobernador de Michoacán de 2002 a 2008, es nieto de Lázaro Cárdenas del Río, el presidente mexicano (1934-1940) cuya aceptación por amplios sectores de la población es tal vez la mayor en la historia de México tras la Revolución. Cárdenas Batel gobernó como miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado por su padre, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y una considerable disidencia del priísmo en 1989.

controlar el territorio y expulsar al cártel invasor, apoyándose de manera simultánea, en un discurso de supuesta reconstrucción del tejido social y de sustento al pueblo michoacano (Morales, 2012). De 2007 a 2009, bajo los gobiernos de Cárdenas Batel y Leonel Godoy, esta organización tomó las riendas de todos los negocios ilegales presentes en el estado.

En 2009 la economía en Michoacán va en picada. La violencia aumenta y se materializa en secuestros, extorsiones y enfrentamientos entre La Familia Michoacana y algunos otros grupos que intentan robar el poder económico en el estado (Maldonado, 2010). La estrategia militar llamada *Operativo Conjunto Michoacán*, implantada como primera acción del gobierno de Felipe Calderón (Hernández, 2014: 53), había fracasado rotundamente: el amplio número de efectivos militares y de policías federales no logró tomar el control de la organización criminal.

Una nueva ruptura al interior del crimen organizado en 2010 produjo un nuevo grupo: Los Caballeros Templarios. Quienes lograron replegar a La Familia hacia el norte de Michoacán—creando presencia del cártel en Guerrero y en el Estado de México (Redacción, *La Jornada*, 2010). Mientras tanto, el nuevo grupo fortalecía y ampliaba aún más su presencia, ahora en esferas que antes estaban destinadas al estado y a la economía legal. A pesar de que anteriormente las actividades ilegales eran posibles gracias a acuerdos entre integrantes del crimen organizado y las policías municipales o algunos funcionarios, es a partir del arribo de los Templarios que se vuelve mucho más aparente el nexo y las funciones que ejercen dentro del gobierno de Michoacán como parte de sus negocios. Así, desde finales de 2010 y hasta 2013, esta organización criminal controló: *i*) el negocio del aguacate y el limón; *ii*) la mayor parte de los recursos del presupuesto estatal (Martínez, *et. al.*, 2010); *iii*) los laboratorios clandestinos de producción de metanfetaminas; *iv*) la trata de mujeres; *v*) los medios de comunicación; *vi*) las elecciones de 2011 mediante la compra de votos e imponiendo candidatos, incluido el gobernador, Fausto Vallejo; *vii*) la extracción y exportación (i)legal de hierro y maderas preciosas; y finalmente *viii*) las extorsiones a empresarios, ganaderos, productores, y familias enteras. Sería esta situación la que desataría la revuelta.

VIOLENCIAS LEGALES: EL CASO DE LAS ENCINAS

La región de la costa-sierra michoacana es conocida por sus yacimientos de hierro, oro, cobre y otros minerales. El municipio de Aquila, ubicado dentro de esta región, es el más grande de Michoacán, dividido en cuatro comunidades indígenas: San Miguel Aquila, Coire, Pomaro y Ostula.

La mina férrea Las Encinas, manejada actualmente por la compañía Ternium, tiene una larga historia de conflictos y enfrentamientos con la comunidad indígena de San Miguel Aquila desde la década de los ochenta. El predio donde se ubica el proyecto minero, localizado dentro de la comunidad de San Miguel Aquila, fue concesionado desde 1971 para explorar y explotar el mineral de la región. La mina formaba parte en ese momento del grupo regionmontano Hojalata y Lámina S.A. (HYLSA) (Las Encinas, 2007).

En 1982 la comunidad nahua de San Miguel de Aquila, respaldada por la UCEZ (Unión de Comuneros Emiliano Zapata), denunció la extracción por parte de HYLSA. La empresa hasta ese momento sólo había pagado a la comunidad por la explotación de sus tierras “un total de 4 000 pesos a título de renta de tierra, dos máquinas de escribir, 10 becas para estudiar bachillerato y pequeños volúmenes de materiales de construcción”. Así, comenzó el movimiento en contra de la minera liderado por José Ramírez Verduzco y Efrén Capiz Villegas, ambos afiliados a la UCEZ.

Ramírez Verduzco fue asesinado el 29 de abril de 1989, situación que cambió el rumbo de la defensa del territorio. El 15 de diciembre de 1990 la empresa Las Encinas firma una cesión de derechos con los comuneros de Aquila y obtiene un contrato de ocupación temporal de 383 hectáreas (Santos y Martínez, 2015; Las Encinas, 2007).

Más tarde, en el año 2005, el grupo empresarial italo-argentino Techint adquirió la empresa regionmontana HYLSA, convirtiéndose ésta en Ternium México, empresa que actualmente es responsable de la mina de Aquila. Es así como las tensiones entre la comunidad y la minera surgen nuevamente. Los principales conflictos giran en torno a afectaciones socio-ambientales relacionadas con la extracción de hierro y el deshecho de materiales

contaminantes, así como con el incumplimiento de pago de regalías a la comunidad por parte de Ternium (Rojas 2005; Méndez 2009).

No obstante, es a partir del año 2010 que la violencia comienza a aumentar en la región a través de la presencia de grupos del crimen organizado, lo que desencadenó una mayor desestabilización social y política. En diciembre del 2011 los comuneros comienzan un bloqueo en la mina como acto de protesta por las acciones abusivas de la compañía: la comunidad demanda el pago de las regalías, así como un incremento en el pago por la explotación de sus tierras y una renegociación de los términos del contrato. Al no lograr llegar a un acuerdo, el plantón permanece hasta el 6 de febrero del 2012, cuando aproximadamente 300 elementos de la Policía Federal, la Armada de México y la Secretaría de la Defensa Nacional intentan desalojarlos con violencia mediante detenciones arbitrarias (Martínez Elorriaga, 2012).

Dichas detenciones resultaron en un proceso opresivo llevado a cabo por el gobierno del estado en donde se obliga a los comuneros a firmar un acuerdo el 18 de marzo de 2012. El acuerdo estipulaba un pago de 18 mil pesos mensuales por comunero. Es importante resaltar que, a pesar de la existencia de la mina en esta región, el municipio de Aquila tiene como principal actividad económica la agricultura y la ganadería. En este sentido, como indican Santos y Martínez, la comunidad “nunca había experimentado cambios por los ciclos de capital en la región ya que [ésta funcionaba] como institución protectora del régimen, lo que permitió la conservación de su tradición agraria en un contexto minero” (Santos y Martínez 2015, 294). Sin embargo, el mismo flujo de capital potenciado por la minera, lejos de asistir en el ‘desarrollo económico’ propuesto por el gobierno, desató una serie de actos corruptos, los cuales llegaron a su punto máximo con la presencia de los Caballeros Templarios.

El 12 de abril del 2012, Ternium decide divulgar en medios locales el acuerdo firmado con la comunidad, aseverando que hace un pago mensual a cada uno de los 464 comuneros por \$12,000 pesos. Este es el acto que eventualmente firma la condena de la gente de Aquila, al ponerlos en la mira de los Caballeros Templarios, quienes extorsionaban a los comuneros cobrándoles un porcentaje del dinero recibido por la concesión.

El 3 de mayo de 2013 la comunidad de Aquila se levanta en armas contra la extorsión, tomando el palacio de gobierno de la cabecera municipal el 24 de julio. Sin embargo, el 14 de agosto de ese mismo año el gobierno estatal, liderado por Jesús Reyna García⁴ y el comisionado Alfredo Castillo, decide desarticular al movimiento de forma violenta. Así, 200 comuneros son desarmados y más de 40 son detenidos con procesos arbitrarios y poco transparentes. Una vez más, Aquila enfrenta un operativo dirigido por fuerzas del estado que involucra a elementos de la Policía Federal, el Ejército Mexicano, así como la Marina, y que lejos de orquestarse contra los grupos criminales de la región, comienza a detener a grupos de civiles que habían desarrollado procesos alternativos de autodefensa para la protección local.

MOVIMIENTOS ARMADOS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

A partir de los diversos levantamientos armados de policías comunitarias en 2011 y autodefensas en 2014, las cosas empezaron a cambiar en Michoacán. En primer lugar, se fue creando una suerte de milicias que lograron hacer frente al crimen organizado, desarticulando casi por completo al cártel. Los templarios que quedaron, tuvieron que huir de la entidad o esconderse para escapar de las autodefensas (Báez, 2013). En segundo lugar gracias a la visión de uno de sus coordinadores, el médico José Manuel Mireles Valverde, se evidenció y cuestionó la fusión del crimen organizado con las esferas del poder político y económico, tanto a nivel estatal como federal (Paredes, 2013). Así las autodefensas abrieron dos frentes: al noroeste hasta intentar llegar a Apatzingán y Uruapan abarcando toda la zona de producción de aguacate y limón; y al sur, hacia la costa, en los municipios de Aquila y Coahuayana, intentan-

4 Secretario del gobierno de Michoacán (2012-2014), fue nombrado gobernador interino para el estado dentro del periodo de abril a octubre de 2013 por problemas de salud del entonces gobernador Fausto Vallejo. En abril de 2014 es detenido y arraigado por nexos con los Caballeros Templarios, y hasta el momento permanece en prisión.

do llegar a Lázaro Cárdenas.

Este proceso revirtió —incipientemente y de manera organizada—, lo que el capitalismo criminal logró al trasladar la racionalidad de sus acciones a la lógica económica, a pesar de la presencia del estado.

Lo que el movimiento de autodefensas intenta ahora, junto con la participación de diversos sectores de la población es que las acciones cotidianas se centren en la construcción de proyectos de vida, no de muerte.

Tras la legalización de la mitad de integrantes de las autodefensas por el comisionado Alfredo Castillo y un aparente pacto con el Gobierno Federal, viejos grupos criminales resurgieron con otro rostro, reciclando además a integrantes de los Caballeros Templarios. Grupos como Los Viagras, H3, Cártel de Michoacán y Nueva Familia Michoacana son ejemplos de una atomización del cártel y, sobre todo, una serie de nuevos intereses y grupos de poder que están, de nueva cuenta, intrínsecamente ligados a las más recientes estructuras políticas tras el derrumbe del gobierno de Vallejo.

VIOLENCIAS ILEGALES: EL CASO DE LA NUEZ

Situada en medio de una profunda cañada del sistema montañoso que separa la costa de Tierra Caliente bordeando los límites de Aquila se encuentra la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, perteneciente al municipio de Chinicuilá. Tiene tan sólo dos calles trazadas y algunas veredas que se desprenden, no hay pavimento y lo único que luce cierto esfuerzo urbanístico es la diminuta plaza central, su quiosco y la iglesia; el resto son casas de madera y techo de lámina con porches llenos de macetas y gallos. La jefatura de tenencia—representación del poder municipal—está en la entrada del pueblo y es una desprovista oficina en la que atienden miembros de la policía comunitaria, todos partícipes también del movimiento de autodefensas y ahora responsables de la seguridad de la localidad.

Se trata de hombres que oscilan entre los 50 y 60 años quienes lograron expulsar al crimen organizado a base de armas y rondines las 24 horas del día. En nuestra visita nos reciben amablemente

y en una especie de semicírculo a nuestro alrededor nos cuentan cómo estaba la situación antes de que el movimiento de las autodefensas apareciera:

Aquí los Templarios entraron porque los trajo uno de la comunidad, no eran muchos, pero estaban muy armados y comenzaron a amenazar a todos. Hacían sus fiestas en aquella tienda, ponían la música a todo volumen, empezaron a reclutar a algunas personas de aquí. Si alguien les decía algo, ellos lo amenazaban con desaparecerlo o matarlo y siempre andaban con sus armas por fuera. Nos cobraban cuotas según iban queriendo y quienes no podían o no querían pagar, mejor se fueron de la comunidad. Esto fue a mediados de 2011. (Zambrano, 2016)

A pesar de lo pequeña y remota que puede resultar Huitzontla en comparación con otros centros de población como Aquila o la misma costa michoacana, su importancia económica está basada en la existencia de amplios yacimientos de minas de hierro que no habían sido explotadas cuya existencia y localización era conocida. De hecho, décadas atrás la comunidad ya había resistido la presencia de Ternium y exploraciones ilegales llevadas a cabo por la compañía en los ochenta (Correa, 1982).

Localizada a 35 minutos de la 65 Zona Militar del municipio de Coalcomán y a 45 minutos del puesto de control de la marina en el municipio de Aquila, la mina explotada ilegalmente por los Caballeros Templarios se encuentra a un costado de la carretera federal que comunica Tierra Caliente con la costa. Aquí el paso de vehículos es constante por lo que resulta imposible creer que ninguna autoridad vio la maquinaria pesada y a los trabajadores necesarios para transportar lo que, según cálculos hechos por habitantes de la comunidad, podrían ser 300 toneladas de hierro al día.

Desde 2012 y hasta que el movimiento de autodefensas se consolidó en Chinicuila a mediados de 2013, los Caballeros Templarios transportaron el hierro que extraían directamente a Colima: “eso se lo llevaban a Manzanillo; al puerto de Manzanillo se lo estaban llevando allá” (Altanar, 2016). Y desde ahí, almacenado en contenedores, se exportaba ilegalmente hacia China, uno de los

países con mayores intereses en el mineral (Hernández, 2014; Redacción *Sin Embargo*, 2014).

El ambiente de miedo que se había sembrado en la comunidad y la región, impidió que se detuviera esta situación. El contubernio de los cuerpos de seguridad federales, quienes permitían abiertamente que éste y otros negocios se llevaran a cabo, ocasionó incertidumbre e impotencia entre la población: “Los delincuentes del crimen organizado tenía dominado al municipio. No se podía hacer nada. Estaban también explotando otra mina más arriba, y por aquí bajaban el material igualmente. Era muy difícil la situación.” (Altanar, 2016)

Desde otras poblaciones llegaban las noticias del horror que se había desatado en la vida cotidiana. Los Caballeros Templarios, bajo un discurso de supuesta insurgencia y lucha social (Moreno, 2010) se habían apoderado de todas las esferas de la vida pública y a la menor reticencia aplicaban castigos que iban desde golpizas hasta brutales ejecuciones. Ésta parece ser la razón principal por la que la resistencia y el combate en contra de los Templarios tardó en ocurrir: fue necesario que un movimiento de mayor envergadura reuniera estos miedos de manera organizada y los convirtiera en una estrategia de seguridad y vigilancia.

Luego de que, en mayo de 2013, la situación de las autodefensas se difundiera en medios nacionales e internacionales, el avance ocurrió por distintos frentes y uno de ellos fue el que trató de acabar con el crimen organizado hacia el sur de Tierra Caliente hasta llegar a la costa. De forma muy similar a como se había llevado a cabo en otros municipios, ciertos habitantes de Chinicuilá se organizaron en secreto y consolidaron el núcleo de autodefensas que recibiría apoyo de grupos de Tepalcatepec y Coalcomán. Cuando las autodefensas llegaron a Villa Victoria –cabecera municipal– empezaron los operativos de cateos y búsqueda de los Templarios, con lo cual lograron detenciones y la desestructuración del poder criminal en el territorio.

Poco a poco, ya con la presencia de las autodefensas, comenzaron a conocerse, no sólo los efectos de la violencia y las historias de horror que la población tuvo que protagonizar a punta de disparos, asesinatos y desapariciones, violaciones a mujeres y extorsiones exorbitantes. Además, se fue conociendo el *modus operandi*

del crimen organizado en temas como el de la explotación, comercialización y exportación minera.

Sumado al miedo, también existía una preocupación por el medio ambiente, por la contaminación del territorio de la comunidad, la cual tiene 3 mil hectáreas en posesión y 16 mil en litigio agrario: un total de 19 mil hectáreas.

La contaminación de los recursos naturales, la explotación ilegal de minas de hierro, y el contubernio de algunos funcionarios públicos y cuerpos de seguridad con el crimen organizado, nos muestra un cuadro bastante claro de una de las facetas criminales del capitalismo. Aquella que después de adelgazar al Estado, le otorgaba a éste características similares a las de una organización criminal: no importa lo que se haga con tal de obtener los objetivos económicos previstos.

El 1 de mayo del 2014 se reportó la retención de un embarque en el puerto de Manzanillo con 68 750 toneladas de hierro extraído de forma ilegal (Jane's Information Group, 2014). El reporte expedido por Alfredo Castillo incriminaba a los Caballeros Templarios como responsables del barco, el cual tenía un valor aproximado de \$720 000 dólares por su contenido. Lo interesante de este caso, es que una vez más el reporte sólo apuntó a un grupo criminal, y no a las personas involucradas en el caso; esto es, a los agentes responsables del puerto y aduana, así como a los compradores del hierro ilegal en China.

NECROPOLÍTICA EN MICHOACÁN, HACIA UNA CONCLUSIÓN

La presencia de los Caballeros Templarios dentro de los dos casos de estudio presentados, funciona como una confirmación de que el poder político y económico ya no concreta simplemente alianzas o acuerdos estratégicos con el poder criminal. La cercanía y frecuencia han hecho que esta relación avance hasta consolidarse en una fusión, una amalgama en la que ya no se puede distinguir lo legal de lo ilegal; entre quién es gobernador, secretario de gobierno o presidente municipal y quién es jefe de plaza en alguna zona del estado. Todos los esfuerzos se enfocaron en algo semejante a la

concepción de necropolítica de Mbembe. Esto es, las estructuras económicas permitieron que una serie de poderes legales e ilegales se constituyeran y sustentaran a partir de la decisión de matar: decisión aparentemente operativa.

Luego de que las autodefensas entraran en el escenario michoacano, muchas de las inconformidades que ya existían en la entidad se canalizaron en la construcción de una nueva sociedad. Por supuesto, no es sencillo y mucho menos si se trata de un movimiento armado, disparejo, fragmentado y dividido por el Gobierno Federal. Sin embargo, retomando los planteamientos de Pansters (2012), la policías comunitarias en ambos casos parecen haber recurrido a una forma de violencia contra-institucional retomando el monopolio del uso de la violencia, para poder generar espacios de seguridad y una recuperación de bienes y recursos. Una política social que trabaja desde abajo para detener los procesos de necroeconomía y necropolítica.

A pesar de los dos años de confrontación abierta entre grupos del crimen organizado, en varios municipios se alcanzó a desarrollar una suerte de ámbito de participación política en donde las personas afectadas llevan a cabo asambleas en donde discuten el rumbo del municipio, las decisiones del nuevo poder político y vigilan a los partidos políticos. En términos de seguridad, el gobierno federal ha intentado imponer un modelo de mando único en donde se eliminan los cuerpos de policía anteriores y se crea uno nuevo, pero con elementos reciclados y externos. Sin embargo, los Consejos Ciudadanos y los remanentes del movimiento de autodefensas se han opuesto a esta iniciativa anteponiendo que son ellos quienes pueden y deben encargarse de la seguridad.

Luego de destaparse la olla de violencia y crimen en que se convirtió Michoacán, otro elemento importante a resaltar, y que permea los ejemplos que hemos utilizado es, sin duda, la capacidad del crimen organizado y la clase política para desacralizar la vida y convertirla en algo sin valor. Una vez desvalorizada, la vida puede quitarse sin problema alguno. Quienes están en control del aparato criminal, no conciben las muertes como un sacrificio y por ende, es posible reproducir este control sobre la vida y la propia muerte con fines económicos. Es este el sustento del biopoder en el México de la segunda década del siglo XXI. La ola de violencia y alianzas entre

gobernantes, funcionarios e integrantes de distintas organizaciones criminales ha llevado a un enriquecimiento ilimitado para estos actores, y también a una fusión que difícilmente podrá disolverse con paliativos de políticas públicas asistencialistas o grandes actos protocolarios. Si la estructura estatal capitalista es la que permitió —por su naturaleza acumulativa y explotadora— que este proceso tuviera lugar, lo que puede impedir su reproducción y el aumento de la violencia, es el intento de construir una alternativa social, política, económica y cultural que tenga otro camino como horizonte.

BIBLIOGRAFÍA Y
REFERENCIAS:

BUNGE VIVIER, V. (2012). “Los núcleos agrarios y su relación con la conservación de los recursos naturales”.

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, SEMARNAT. Disponible en: http://ine.gob.mx/descargas/cuencas/doc_trabajo_nucleos_agrarios_conservacion.pdf.

CEDRSSA (2015). “La propiedad social rural y su perfil productivo.” Mexico: Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

CORREA, G. (1982). “200 comunidades de Michoacán exigen a Alfa 5,000 millones por saqueo” en *Proceso*, 5 de junio, sec. Archivo. Disponible en: <http://www.proceso.com.mx/133611/200-comunidades-de-michoacane-xigen-a-alfa5000-millones-por-saqueo>.

GIL OLMOS, J. (2015). *Las Batallas de Michoacán. Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto*. Mexico: Editorial Proceso.

HARVEY, D. (2004). “The ‘New’ Imperialism: Accumulation by Dispossession” en: *Socialist Register*. V.40: 63–87.

HERNÁNDEZ NAVARRO, L. (2014). *Hermanos en armas. Policías comunitarias y autodefensas*. Texcoco: Editorial Brigada Cultural.

INEGI (2016). “Michoacán de Ocampo.” México en cifras. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

JANE’S INFORMATION GROUP (2014). “Smuggling Operation Means Legitimate Mining Faces Delay to Iron Ore Exported through Mexico’s Lázaro Cárdenas Port.” *Criminology and Law Enforcement* 86. The Americas. United Kingdom: Jane’s Country Risk Daily Report. Disponible en: <http://silk.library.umass.edu/login?url=https://search.proquest.com/docview/1520547825?accountid=14572>.

LAS ENCINAS S.A. DE C.V. (2007). “Proyecto de ampliación de la superficie de explotación de la ‘mina Aquila’, Aquila, Michoacán.” SEMARNAT. Disponible en: <http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/mich/estudios/2007/16MI2007M000.pdf>.

LOPCAM, R. (2014). "Brevisima Historia Del Crimen Organizado En Michoacán (2 de 2)." Agencia Autónoma de Comunicación *SubVersiones*, March 13, sec. Seguridad. Disponible en: <http://subversiones.org/archivos/21132>.

MALDONADO ARANDA, S. (2010). *Los márgenes del Estado Mexicano. Territorios ilegales, desarrollo y violencia en Michoacán*. Mexico: El Colegio de Michoacán.

MARTÍNEZ ELORRIAGA, E. (2012). "Policías y militares intentan desalojar bloqueo en Aquila." *La Jornada*, 8 de febrero, sec. Estados. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2012/02/08/estados/035n1est>.

MARTÍNEZ, E. José Antonio Román. 2010. "De 1985 a 2009 el jefe del cártel La Familia estuvo en la nómina del gobierno michoacano." *La Jornada*, 9 de diciembre, sec. Política. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2010/12/09/politica/015n1pol>.

MBEMBE, A. (2011). *Necropolítica; seguido de Sobre el gobierno privado indirecto*. Traducción: Elisabeth Falomir Archambault. Barcelona: Melusina.

MBEMBE, A, Amador Fernández-Savater, Pablo Lapuente Tiana, y Amarcela Varela. (2016). "Achille Mbembe: 'Cuando el poder brutaliza el cuerpo, la resistencia asume una forma visceral.'" en *El diario*, 17 de junio, sec. Interferencias. Disponible en: http://www.eldiario.es/interferencias/Achille-Mbembe-brutaliza-resistencia-visceral_6_527807255.html.

MÉNDEZ, Á. (2009). "Minera Ternium contrata empresa de relaciones públicas especialista en crisis." *Coahuayana: Visiones Urgentes*. 27 de noviembre. Disponible en: <http://coahuyanavisionesurgentes.blogspot.mx/2009/11/minera-ternium-contrata-empresa-de.html>.

MORALES, E. (2012). *Palabra de Caballero. Los Caballeros Templarios, un movimiento insurgente*. Michoacán.

MORENO, N. (2010). *Me dicen: 'El más loco'*. Michoacán, México.

- PANSTERS, W. G. (2012). *Violence, Coercion, and State-Making in Twentieth-Century Mexico the Other Half of the Centaur*. Stanford, Calif.: Stanford University Press. Disponible en: <http://public.eblib.com/choice/publicfull-record.aspx?p=881951>.
- PAREDES, H. (2013). "Autodefensa ciudadana en Tepalcatpec, Michoacán." *Agencia Autónoma de Comunicación SubVersiones*, 17 de junio, sec. Seguridad. Disponible en: <http://subversiones.org/archivos/8526>.
- REDACCIÓN *LA JORNADA MICHOCÁN* (2010). "Nazario Moreno, dirigente del cártel y guía espiritual." *La Jornada Michoacán*, 11 de diciembre, sec. Política. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2010/12/11/politica/006n1pol>.
- REDACCIÓN *SINEMBARGO* (2014). "Templarios envían hierro a China y les mandan químicos: WSJ; 'Cárteles compiten ya con empresas legítimas', dice." *SinEmbargo*, 15 de enero, sec. México. Disponible en: <http://www.sinembargo.mx/15-01-2014/873559>.
- ROJAS, R. (2005). "Causa una minera daños a la salud y el ambiente en Aquila, acusan representantes." *La Jornada*, 2 de diciembre. Disponible en: <http://www.jornada.unam.mx/2005/12/02/index.php?section=sociedad&article=053n1soc>
- SANTOS CORDERO, B., y Eleocadio Martínez Silva (2015). "El 'consentimiento' negociado entre dos comunidades mineras mexicanas y las transnacionales Goldcorp Y Ternium." *Región Y Sociedad* 27 (64): 285–311.
- VALENCIA, S. (2012) "Capitalismo gore y necropolítica en el México contemporáneo." en: *Relaciones Internacionales GERI UAM* 19 (Febrero): 83–102.
- ENTREVISTAS
- ALTANAR DÍAZ, E. (2016). Combate contra el crimen organizado en Chinicuilá Entrevista por Heriberto Paredes, Ana Del Conde, y Timo Dor.
- BÁEZ, S. (2013). ¿Cómo nos dominaron los Caballeros Templarios? Entrevista por Heriberto Paredes.

RAMÍREZ, J. (2016). La Historia de Ternium en Aquila Entrevista por Heriberto Paredes, Ana Del Conde, y Timo Dor.

ZAMBRANO, L. (2016). El contexto de Chinicuila Entrevista por Heriberto Paredes y Ana Del Conde.